

DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN CANARIAS (pp. 2-9)

—

DRET I POLÍTQUES AMBIENTALS A CANÀRIES (pp. 11-17)

ADOLFO JIMÉNEZ JAÉN

Profesor titular de Derecho Administrativo / Professor titular de Dret Administratiu

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Sumario: 1. Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias. 2. Ley 10/2010, de 27 de diciembre, de modificación de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas. 3. La Red de Parques Nacionales de Canarias.

1. Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias

La Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias, viene a derogar la Ley 1/1998, de 8 de enero, adaptando la normativa autonómica a las previsiones contenidas en la Directiva 2006/123/CEE, relativa a los servicios del mercado interior, así como a las leyes 17/2009, de 23 de noviembre, y 25/2009, que incorporan dicha Directiva al derecho interno español.

La Ley se divide en seis títulos (“Preliminar”, “De las licencias de actividad clasificada”, “De la comunicación previa la instalación y apertura de actividades clasificadas no sometidas al régimen de autorización”, “De la autorización de espectáculos públicos”, “De los requisitos de las actividades y espectáculos públicos”, “Régimen de comprobación, inspección y sancionador”).

En cuanto a su contenido, pueden destacarse los siguientes aspectos.

En relación con el régimen de intervención previa, la Ley sustituye las autorizaciones por un régimen plural en función del tipo de actividad y de la incidencia que pueda tener sobre el medio ambiente, la comodidad o la salud de las personas. Para ello, la nueva norma establece la distinción esencial entre actividades clasificadas y no clasificadas (art. 2), concibiéndose las primeras como aquellas que sean susceptibles de ocasionar molestias, alterar las condiciones de salubridad, causar daños al medio ambiente o producir riesgo para las personas o para las cosas, y las segundas, como aquellas actividades en las que no concurra ninguno de los requisitos señalados para las actividades clasificadas o, de hacerlo, lo haga con una incidencia no relevante.

Con respecto a las actividades clasificadas, la Ley distingue, a su vez, dos instrumentos de intervención, el de la comunicación previa y el de la autorización administrativa (art. 4). El régimen ordinario de intervención será el de la comunicación previa; el régimen de autorización administrativa operará de forma excepcional, de tal forma que resulta de aplicación respecto a aquellas actividades para las que el Gobierno, mediante decreto, establezca expresa y motivadamente, al concurrir las dos circunstancias siguientes: que,

por sus propias características objetivas o su emplazamiento, presenten un riesgo de incidencia grave o muy grave sobre los factores que clasifican la actividad respectiva, y que, de tener lugar tal incidencia, los efectos negativos que se producirían fueran irreversibles o difícilmente reversibles.

En el régimen autorizatorio, con la finalidad de reducir la posible incidencia de la intervención administrativa, se abandona la actual regulación trifásica y se parte de un procedimiento exclusivamente municipal en el que no existe una fase intermedia de calificación sino, simplemente, un trámite de informe de calificación que, en la mayoría de los casos, será emitido por los propios ayuntamientos, de forma que se sustituye la competencia de los cabildos, que pasa a ser residual, con carácter general o para determinados supuestos específicos (art. 21). Asimismo, en este procedimiento se contempla un régimen de plazos cortos (3 meses con carácter general y 5 meses cuando sea necesaria la intervención de los cabildos). En último término, el silencio administrativo, que en la Ley se denomina erróneamente *del acto presunto*, se entenderá con carácter positivo para las actividades clasificadas como molestas, salvo que dentro de los plazos establecidos para la resolución se haya producido un informe de calificación negativo (art. 24).

Por su parte, el régimen de comunicación previa, que va a convertirse en el general, se sustenta en dos premisas: por un lado, la responsabilidad de la adecuación de la instalación o actividad a las condiciones legales se concentra, básicamente, en los técnicos o facultativos redactores de los proyectos o certificantes de las instalaciones (artículo 59, que define los responsables de las posibles infracciones); y, por otro lado, la potenciación de la labor de información previa de la Administración a favor del operador, a través de las consultas, que permite a este conocer el grado de adecuación de su proyecto a la legalidad urbanística o al régimen específico de intervención aplicable a la actividad que pretende implantar o a cualquier modificación de esta.

La Ley contiene la regulación de diversas situaciones especiales carentes de regulación normativa o desfasadas por la jurisprudencia, tales como el régimen de precedencia de la licencia de actividad con respecto a la de obra (art. 7); los requisitos exigibles a la apertura de actividades en edificios en régimen de fuera de ordenación o que no se ajusten a la legalidad urbanística; la posibilidad de autorizar instalaciones y actividades provisionales cuyo uso no coincida con el expresamente establecido en el planeamiento,

y la posibilidad de autorizar instalaciones o actividades públicas en terrenos o parcelas afectos a usos distintos cuando lo exija el interés general (art. 8).

Asimismo, se establecen normas relativas a la articulación con respecto a aquellas actividades sujetas a autorización ambiental integrada u otro tipo de autorizaciones sectoriales, bien sea mediante la exclusión de licencia municipal expresa y su sustitución por el informe municipal a evaluar en dichos procedimientos en el que quedará embebida aquella, bien sea mediante la emisión de informes urbanísticos en los procedimientos de autorización sectoriales. En este sentido, para completar la regulación normativa tendente a la debida coordinación procedimental con otras intervenciones sectoriales o locales, se delimita el ámbito de control respectivo de cada título y se regulan procedimientos de tramitación conjunta o coordinada de licencias que tengan un objeto idéntico (art. 6).

Además de los mecanismos preventivos, la Ley establece también instrumentos de control a posteriori, a cuyo fin se ha operado una nueva sistematización y regulación de los sistemas de comprobación, inspección y sanción de instalaciones y de actividades, así como de los supuestos de extinción, revocación, caducidad y revisión de títulos habilitantes (arts. 30 a 33 y 51 a 57). En dicha regulación se han tenido especialmente en cuenta las innovaciones introducidas por la normativa estatal sobre autorización ambiental integrada y por la normativa autonómica comparada dictada en desarrollo de la legislación estatal.

La nueva ley contiene la regulación de diversos supuestos de responsabilidad administrativa como fórmula de contrapeso a las situaciones de inactividad de la Administración en el debido ejercicio de sus competencias o de cambio de criterio. Dichos supuestos son:

- Los casos de cambio de criterio de la Administración con respecto a lo contestado en informes solicitados como consulta previa y sus efectos indemnizatorios con respecto a los gastos realizados por los particulares siguiendo tales criterios y que hayan devenido inútiles ante un cambio de criterio sobrevenido de la misma Administración.
- Los supuestos de daños y perjuicios ocasionados a terceros por actividades perjudiciales con respecto a las cuales la Administración haya tolerado indebidamente su existencia o habilitado indebidamente su instalación o puesta en funcionamiento.

Finalmente, la nueva norma respeta, con algunas variaciones, el régimen sustantivo contenido en la Ley 1/1998 que afecta a los requisitos de las actividades y los espectáculos públicos (título IV de la Ley 1/1998) y a la tipificación de las infracciones (título V, capítulos II y III), si bien contiene una sustancial reducción de la cuantía de las sanciones pecuniarias.

2. Ley 10/2010, de 27 de diciembre, de modificación de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas

La regulación de las aguas en Canarias viene recogida en la Ley 12/1990, de 26 de julio, que la define como “un recurso natural escaso y valioso, indispensable para la vida y para la mayoría de las actividades económicas”. El tradicional régimen especial del derecho de aguas canario se ha concretado en la asunción por la Comunidad Autónoma de las competencias en esta materia a través de su Estatuto de Autonomía, sin perjuicio de la normativa básica estatal. Por lo tanto, la Ley canaria contiene la regulación integral de los aprovechamientos y recursos hídricos y la ordenación de todo el dominio público hidráulico.

Ya la Ley de 1990 señalaba como principio legal básico la subordinación de todas las aguas al interés general, sobre la base de que se trata de un recurso que debe estar disponible en la cantidad y calidad necesarias, en el marco del respeto al medio ambiente de las islas. Este objetivo se persigue mediante las directrices de la planificación regional y se materializa en las prescripciones de los planes hidrológicos insulares y demás instrumentos de la planificación.

No obstante, la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de calidad de las aguas, tiene un objeto más amplio, concretamente el establecimiento de un marco comunitario para la protección integral de la calidad de las aguas superficiales continentales, las de transición, las costeras y las subterráneas.

Por lo que ahora interesa, dicha norma explicita en su preámbulo la interconexión entre los distintos sistemas hídricos (superficial, fluvial, subterráneo y marino) y la interdependencia de este recurso y otras medidas de actuación sectorial, particularmente las de protección del medio ambiente y lucha contra la contaminación. A tal fin responde la Directiva, cuya declarada finalidad es la de establecer un “marco” y

garantizar “la coordinación, integración y, a más largo plazo, la adaptación de las estructuras y los principios generales de protección y uso sostenible del agua en la Comunidad de conformidad con el principio de subsidiariedad”.

Sin embargo, la Comunidad Autónoma de Canarias no había procedido a adaptar su legislación a dicha normativa, lo que había dado lugar a un requerimiento formulado por la Secretaría de Estado para la Unión Europea con el objeto de responder a la carta de emplazamiento del artículo 260 del Tratado de la Unión Europea, remitida por la Comisión Europea con fecha de 29 de enero de 2010 de resultados del expediente incoado en relación con “la necesidad de que Canarias lleve a cabo una modificación de la Ley [...] de Aguas [...] [a fin de] que se incorpore una delimitación de las demarcaciones hidrográficas en las que se incluya la franja costera, se designe la autoridad competente de cada una de ellas y se prevean los mecanismos de coordinación entre las autoridades estatales y autonómicas que operan en este ámbito”. Por ello, en atención al nuevo concepto de derecho comunitario de demarcación hidrográfica como principal unidad de aplicación de las normas de protección de la calidad de las aguas, así como en atención a la realidad geográfica de nuestra nacionalidad, en la Comunidad Autónoma de Canarias se establecen siete demarcaciones hidrográficas y se designa al Gobierno de Canarias como órgano coordinador de las demarcaciones hidrográficas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Sin embargo, se trata de una reforma puntual destinada exclusivamente a contemplar en la normativa canaria lo dispuesto en el artículo 2.15) de la Directiva, que define *demarcación hidrográfica* como la “zona marina y terrestre compuesta por una o varias cuencas hidrográficas vecinas y las aguas subterráneas y costeras asociadas...”. Esto es, falta todavía por incorporar a nuestro ordenamiento la regulación relativa al contenido que han de tener los planes hidrológicos de cuenca. Tal modificación fue incluso objeto de un avance de proyecto de ley, del que tenemos noticia gracias al dictamen que en su día emitiera el Consejo Económico y Social de Canarias (Dictamen 4/2006).

La Ley está integrada por tres artículos.

El primero incorpora un artículo 5 bis a la Ley de Aguas de Canarias por el que se crean siete demarcaciones hidrográficas (apartado 1), cada una de ellas integrada “por la zona terrestre y marina de la correspondiente cuenca hidrográfica insular; así como las aguas subterráneas, de transición, y costeras asociadas a las citadas cuencas” (apartado 2).

También precisa el modo de identificación cartográfica de cada demarcación hidrográfica, constando en un anexo su planimetría.

El segundo artículo añade un artículo 6 bis a la Ley de Aguas de Canarias a los efectos de identificar al Gobierno como “la autoridad competente como órgano coordinador de las demarcaciones hidrográficas”. Finalmente, el artículo tercero incorpora un apartado h) bis al artículo 7 de la Ley de Aguas de Canarias, de asignación de nuevas competencias al Gobierno de Canarias, en relación con las materias objeto de la Ley.

Concretamente, conviene resaltar que en la Ley falta una nueva organización administrativa de la demarcación hidrográfica, como podrían ser los correspondientes órganos de coordinación de cada una de ellas. La dificultad de implantarla estriba, sin duda, en la necesidad de dar cabida a las autoridades estatales competentes en relación con el dominio público marítimo-terrestre, portuario y de marina mercante, tal y como prevé el artículo 36 bis del texto refundido de la Ley de Aguas del Estado.

3. La Red de Parques Nacionales de Canarias

De acuerdo con una consolidada doctrina del Tribunal Constitucional en la materia — véase a este respecto la Sentencia 194/2004, de 4 de noviembre—, la gestión de los parques nacionales corresponde a las comunidades autónomas, lo que cuenta en la actualidad con expreso reconocimiento en la legislación básica del Estado, representada por la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales, que atribuye la gestión y organización de los parques a las comunidades autónomas en cuyos territorios se encuentren.

En relación con la Comunidad Autónoma de Canarias, la culminación del proceso de trasposos de funciones y servicios en esta materia se ha llevado a cabo mediante el Real Decreto 1550/2009, de 9 de octubre, lo que ha comportado la necesidad de diseñar una estructura organizativa responsable de ejercer dichas competencias de gestión sobre los parques nacionales canarios.

A dicha necesidad se dio respuesta en primera instancia y con carácter urgente mediante el Decreto 172/2009, de 29 de diciembre, por el que se asignan temporalmente a la Viceconsejería de Ordenación Territorial las funciones de gestión de los parques nacionales canarios. No obstante, el diseño definitivo del esquema orgánico y funcional sobre el que se apoyará el ejercicio de las competencias de gestión de los parques

nacionales canarios continuaba aún pendiente y ha sido abordado mediante el presente decreto.

El Decreto consta de 16 artículos, 4 disposiciones adicionales, 1 disposición derogatoria y 3 disposiciones finales, que se estructuran en cuatro capítulos (“Disposiciones generales”, “Organización administrativa de la gestión de los Parques Nacionales Canarios”, “Delegación de las competencias de gestión” y “Disposiciones sobre la declaración, modificación de los límites y pérdida de la condición de los Parques Nacionales”).

Se aborda, en primer término, la creación de la Red Canaria de Parques Nacionales (arts. 3 y 4), con el objetivo de institucionalizar la conexión y las interrelaciones existentes entre los parques nacionales en el archipiélago, así como su conceptualización como un sistema coherente, interdependiente y representativo de las singularidades y los valores naturales, estéticos, sociales, culturales y científicos que convierten a los parques nacionales canarios en un subconjunto claramente diferenciado dentro de la Red de Parques Nacionales creada mediante la Ley 5/2007, de 3 de abril.

Concretamente, la Red Canaria de Parques Nacionales persigue la homogeneidad del conjunto de Parques Nacionales en Canarias, como conjunto específico que presenta particularidades suficientes a nivel de fines, objetivos, organización y régimen jurídico que justifican su existencia autónoma respecto de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos.

Sobre esta base se articulan las líneas organizativas básicas para la gestión de los parques nacionales que integran la Red (arts. 5 a 10). Dicho esquema organizativo pivota, por un lado, en torno a una organización común a toda la Red Canaria, y, por otro lado, a distintos órganos específicos de cada uno de los parques nacionales, como son los directores-conservadores o los patronatos, figuras de existencia obligatoria conforme a la normativa estatal básica.

Con respecto a la organización común a todos los parques, el Decreto aborda la creación de un nuevo órgano colegiado autonómico —la Comisión de Parques Nacionales Canarios—, que encabezará y asumirá, con carácter originario, las funciones administrativas de gestión de la Red Canaria de Parques Nacionales, ejerciendo asimismo su representación y las funciones de coordinación precisas para mantener la coherencia y homogeneidad del sistema (art. 7 a 10).

Por otro lado, al estar la gestión de los restantes espacios naturales protegidos atribuida a los cabildos insulares, el Decreto (art. 14) establece la delegación de las competencias de gestión a los cabildos insulares por razones de homogeneidad, continuidad territorial y armonización de políticas y estrategias de sostenibilidad, lo que garantiza la armonización, coherencia, coordinación y homogeneización de los servicios de la Red Canaria de Parques Nacionales.

Por último, se asignan al Gobierno de Canarias las competencias relativas a la iniciativa para la declaración o modificación de los límites de los parques nacionales en Canarias, la audiencia en caso de la pérdida de la condición de parque nacional o el desarrollo del procedimiento de aprobación de los planes rectores de uso y gestión de los parques.

Sumari: 1. La Llei 7/2011, de 5 d'abril, d'activitats classificades i espectacles públics i altres mesures administratives complementàries. 2. La Llei 10/2010, de 27 de desembre, de modificació de la Llei 12/1990, de 26 de juliol, d'aigües. 3. La Xarxa de Parcs Nacionals de Canàries.

1. La Llei 7/2011, de 5 d'abril, d'activitats classificades i espectacles públics i altres mesures administratives complementàries

La Llei 7/2011, de 5 d'abril, d'activitats classificades i espectacles públics i altres mesures administratives complementàries, deroga la Llei 1/1998, de 8 de gener, i adapta la normativa autonòmica a les previsions de la Directiva 2006/123/CEE, relativa als serveis de mercat interior, així com a les lleis 17/2009, de 23 de novembre, i 25/2009, que incorporen aquesta directiva al dret intern espanyol.

La llei es divideix en sis títols (preliminar; de llicències d'activitat classificada, de comunicació prèvia la instal·lació i obertura d'activitats classificades no sotmeses al règim d'autorització; d'autorització d'espectacles públics; de requisits de les activitats i espectacles públics; règim de comprovació, inspecció i sancionador).

Quant al contingut, podem destacar els aspectes següents.

Amb relació al règim d'intervenció prèvia, la llei substitueix les autoritzacions per un règim plural en funció del tipus d'activitat i de la incidència que pugui tenir sobre el medi ambient, la comoditat o la salut de les persones. Per això, la norma nova de la distinció essencial entre activitats classificades i no classificades (art. 2), que concep les primeres com les que són susceptibles d'ocasionar molèsties, alterar les condicions de salubritat o causar danys al medi ambient o produir risc per a les persones o per a les coses; i les segones com les activitats en què no concorre cap dels requisits assenyalats per a les activitats classificades o, si ho fa, amb incidència no rellevant.

Respecte a les activitats classificades, la llei distingeix, al seu torn, dos instruments d'intervenció, el de la comunicació prèvia i el de l'autorització administrativa (art. 4). El règim ordinari d'intervenció és el de la comunicació prèvia; el règim d'autorització administrativa opera de forma excepcional, de manera que s'aplica a les activitats per a les quals el Govern mitjançant un decret ho estableixi expressament i motivadament, ja que concorren les dues circumstàncies següents: que, per les pròpies característiques objectives o per l'emplaçament, presentin un risc d'incidència greu o molt greu sobre els factors que classifiquen l'activitat respectiva, i que si es produeix aquesta incidència, els efectes negatius que es produirien serien irreversibles o difícilment reversibles.

En el règim d'autoritzacions, amb la finalitat de reduir la possible incidència de la intervenció administrativa, s'abandona l'actual regulació trifàsica i es parteix d'un procediment exclusivament municipal en el qual no hi ha la fase intermèdia de qualificació, sinó, simplement, el tràmit d'informe de qualificació que, en la majoria dels casos, emeten els mateixos ajuntaments, i substitueix així la competència dels capítols, que passa a ser residual, amb caràcter general o per determinats supòsits específics (art. 21). Així mateix, en aquest procediment es preveu un règim de terminis curts (3 mesos amb caràcter general, i 5 mesos quan calgui que intervinguin els capítols). En últim terme, el silenci administratiu, que en la llei s'anomena erròniament de l'acte presumpte, s'entén amb caràcter positiu per a les activitats classificades com a molestes, llevat que en els terminis establerts per a la resolució s'hagi produït un informe de qualificació negatiu (art. 24).

Per la seva banda, el règim de comunicació prèvia, que s'ha de convertir en el general, es fonamenta en dos premisses: d'una banda, la responsabilitat d'adequar la instal·lació o activitat a les condicions legals es concentra, bàsicament, en els tècnics o facultatius redactors dels projectes o que certifiquen les instal·lacions (art. 59, que defineix els responsables de les possibles infraccions) i, de l'altra, es potencia la tasca d'informació prèvia de l'Administració a favor de l'operador, a través de les consultes, que li permet conèixer el grau d'adequació del projecte a la legalitat urbanística o al règim específic d'intervenció aplicable a l'activitat que pretén implantar o a qualsevol modificació.

La llei regula diverses situacions especials que no tenen regulació normativa o que estan desfasades per la jurisprudència, com ara el règim de precedència de la llicència d'activitat respecte a la d'obra (art. 7); els requisits exigibles a l'obertura d'activitats en edificis en règim de fora d'ordenació o que no s'ajusten a la legalitat urbanística; la possibilitat d'autoritzar instal·lacions i activitats provisionals l'ús de les quals no coincideixi amb el que estableix expressament el planejament i la possibilitat d'instal·lacions o activitats públiques en terrenys o parcel·les afectes usos diferents quan ho exigeixi l'interès general (art. 8).

Així mateix, s'estableixen normes relatives a l'articulació respecte a les activitats subjectes a autorització ambiental integrada o un altre tipus d'autoritzacions sectorials, bé sigui per mitjà de l'exclusió de llicència municipal expressa i la seva substitució per l'informe municipal a evacuar en aquests procediments en què la llicència quedarà inclosa, bé sigui per mitjà de l'emissió d'informes urbanístics en els procediments

d'autorització sectorials. En aquest sentit, per completar la regulació normativa tendent a la deguda coordinació procedimental amb altres intervencions sectorials o locals, es delimita l'àmbit de control respectiu de cada títol i es regulen procediments de tramitació conjunta o coordinada de llicències que tinguin un objecte idèntic (art. 6).

A més dels mecanismes preventius, la llei també estableix instruments de control a posteriori, a l'objectiu de la qual s'han operat la sistematització i la nova regulació dels sistemes de comprovació, inspecció i sanció d'instal·lacions i d'activitats, així com dels supòsits d'extinció, revocació, caducitat i revisió de títols habilitants (art. del 30 al 33 i del 51 al 57). En aquesta regulació s'han tingut especialment en compte les innovacions introduïdes per la normativa estatal sobre l'autorització ambiental integrada i per la normativa autonòmica comparada dictada en desplegament de la legislació estatal.

La nova llei regula diversos supòsits de responsabilitat administrativa com a fórmula de contrapès a les situacions d'inactivitat de l'administració en el degut exercici de les seves competències o de canvi de criteri. Aquests supòsits són els següents:

- Els casos de canvi de criteri de l'Administració respecte al que s'ha contestat en informes sol·licitats com a consulta prèvia i els seus efectes indemnitzatoris respecte a les despeses realitzades pels particulars seguint aquests criteris i que hagin esdevingut inútils davant d'un canvi de criteri sobrevingut de la mateixa Administració.
- Els supòsits de danys i perjudicis ocasionats a tercers per activitats perjudicials respecte a les quals l'Administració hagi tolerat indegudament la seva existència o habilitat indegudament la instal·lació o posada en funcionament.

Finalment, la nova norma respecta, amb algunes variacions, el règim substantiu que conté la Llei 1/1998 que afecta els requisits de les activitats i espectacles públics (títol IV de la Llei 1/1998) i la tipificació de les infraccions (títol V, capítols II i III), si bé conté redueix substancialment la quantia de les sancions pecuniàries.

2. La Llei 10/2010, de 27 de desembre, de modificació de la Llei 12/1990, de 26 de juliol, d'aigües

La Llei 12/1990, de 26 de juliol, regula les aigües a Canàries, i defineix l'aigua com "*un recurso natural escaso y valioso, indispensable para la vida y para la mayoría de las actividades económicas*". El règim especial del dret d'aigües tradicional canari s'ha

concretat en l'assumpció per la comunitat autònoma de les competències en aquesta matèria a través de l'Estatut d'autonomia, sense perjudici de la normativa bàsica estatal. Per tant, la llei canària regula de manera integral els aprofitaments i els recursos hídrics i ordena tot el domini públic hidràulic.

La Llei de 1990 assenyalava com a principi legal bàsic la subordinació de totes les aigües a l'interès general, basant-se que es tracta d'un recurs que ha d'estar disponible en la quantitat i qualitat necessàries, en el marc del respecte al medi ambient de les illes. Objectiu que es persegueix amb les directrius de la planificació regional i es materialitza en les prescripcions dels plans hidrològics insulars i la resta d'instruments de planificació.

No obstant això, la Directiva 2000/60/CE, del Parlament europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2000, per la qual s'estableix el marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política de qualitat de les aigües té un objecte més ampli, concretament establir un marc comunitari per a la protecció integral de la qualitat de les aigües superficials continentals, les de transició, les costaneres i les subterrànies.

Pel que ara interessa, aquesta norma, en el preàmbul, explicita la interconnexió entre els diferents sistemes hídrics (superficial, fluvial, subterrani i marí) i la interdependència d'aquest recurs i altres mesures d'actuació sectorial, particularment les de protecció del medi ambient i lluita contra la contaminació. A aquest fi respon la directiva, la declarada finalitat de la qual és la d'establir el "marc" i garantir "*la coordinación, integración y, a más largo plazo, la adaptación de las estructuras y los principios generales de protección y uso sostenible del agua en la Comunidad de conformidad con el principio de subsidiariedad*".

No obstant això, la Comunitat Autònoma de Canàries no havia adaptat la legislació a aquesta normativa, la qual cosa havia donat lloc al requeriment que havia formulat la Secretaria d'Estat per a la Unió Europea amb l'objecte de respondre a la carta d'emplaçament de l'article 260 del Tractat de la Unió Europea, remesa per la Comissió Europea amb data 29 de gener de 2010 a resultes de l'expedient incoat amb relació a "*la necesidad de que Canarias lleve a cabo una modificación de la Ley (...) de Aguas [a fin de (...)] que se incorpore una delimitación de las demarcaciones hidrográficas en las que se incluya la franja costera, se designe la autoridad competente de cada una de ellas y se prevean los mecanismos de coordinación entre las autoridades estatales y*

autonómicas que operan en este ámbito". Per això, en atenció al nou concepte de dret comunitari de demarcació hidrogràfica com a principal unitat d'aplicació de les normes de protecció de la qualitat de les aigües, així com en atenció a la realitat geogràfica de la nostra nacionalitat, a la Comunitat Autònoma de Canàries s'estableixen set demarcacions hidrogràfiques, i es designa el Govern de Canàries com a òrgan coordinador de les demarcacions hidrogràfiques en l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de Canàries.

No obstant això, es tracta d'una reforma puntual destinada exclusivament a preveure en la normativa canària el que disposa l'article 2.15) de la Directiva, que defineix "demarcació hidrogràfica" com la *"zona marina y terrestre compuesta por una o varias cuencas hidrográficas vecinas y las aguas subterráneas y costeras asociadas"*. És a dir, encara falta incorporar al nostre ordenament la regulació relativa al contingut que han de tenir els plans hidrològics de conca. Aquesta modificació va ser, fins i tot, objecte d'un avanç de projecte de llei, del qual tenim notícia gràcies al dictamen que al seu dia va emetre el Consell Econòmic i Social de Canàries (Dictamen 4/2006).

La llei integra tres articles.

El primer incorpora l'article 5.bis a la llei d'aigües de Canàries, pel qual es creen les demarcacions hidrogràfiques (apartat 1), set, cada una de les quals integrades *"por la zona terrestre y marina de la correspondiente cuenca hidrográfica insular; así como las aguas subterráneas, de transición, y costeras asociadas a las citadas cuencas"* (apartat 2). També precisa el mode d'identificació cartogràfica de cada demarcació hidrogràfica, la planimetria de les quals consta en un annex.

El segon article afegeix l'article 6 bis a la llei d'aigües de Canàries, als efectes d'identificar el Govern com *"la autoridad competente como órgano coordinador de las demarcaciones hidrográficas"*. Finalment, l'article tercer incorpora l'apartat h).bis a l'art. 7 de la llei d'aigües de Canàries, d'assignació de noves competències al Govern de Canàries, amb relació a les matèries objecte de la llei.

Concretament, convé ressaltar que a la llei hi falta una nova organització administrativa de la demarcació hidrogràfica, com a òrgans de coordinació en cada demarcació hidrogràfica. La dificultat de dur-ho a terme està, sens dubte, en la necessitat de donar cabuda a les autoritats estatals competents en relació al domini públic maritimoterrestre,

portuari i de marina mercant, tal com preveu l'article 36.bis del Text refós de la llei d'aigües de l'Estat.

3. La Xarxa de Parcs Nacionals de Canàries

D'acord amb la consolidada doctrina del Tribunal Constitucional en la matèria, entre les quals la Sentència 194/2004, de 4 de novembre, gestionar els parcs nacionals correspon a les comunitats autònomes, la qual cosa actualment té exprés reconeixement en la legislació bàsica de l'Estat, representada per la Llei 5/2007, de 3 d'abril, de la Xarxa de Parcs Nacionals, que atribueix la gestió i l'organització dels parcs a les comunitats autònomes en els territoris de les quals es localitzen.

Amb relació a la comunitat autònoma de Canàries, la culminació del procés de traspassos de funcions i serveis en aquesta matèria s'ha dut a terme per mitjà del Reial decret 1550/2009, de 9 d'octubre, la qual cosa ha portat a la necessitat de dissenyar una estructura organitzativa responsable d'exercir les competències de gestió en els parcs nacionals canaris.

A aquesta necessitat es va donar resposta en primera instància i amb caràcter urgent per mitjà del Decret 172/2009, de 29 de desembre, pel qual s'assignen temporalment les funcions de gestió dels parcs nacionals canaris a la Viceconselleria d'Ordenació Territorial. No obstant això, el disseny definitiu de l'esquema orgànic i funcional sobre el qual s'ha de recolzar l'exercici de les competències de gestió dels parcs nacionals canaris continuava encara pendent i s'ha abordat per mitjà d'aquest decret.

El decret consta de setze articles, quatre disposicions addicionals, una disposició derogatòria i tres disposicions finals, estructurats en cinc capítols (disposicions generals; organització administrativa de la gestió dels parcs nacionals canaris; delegació de les competències de gestió, i, disposicions sobre la declaració, modificació dels límits i pèrdua de la condició dels parcs nacionals).

En primer terme, s'aborda la creació de la Xarxa Canària de Parcs Nacionals (art. 3 i 4), amb l'objectiu d'institucionalitzar la connexió i les interrelacions existents entre els parcs nacionals a l'arxipèlag, així com la seva conceptualització com un sistema coherent, interdependent i representatiu de les singularitats i valors naturals, estètics, socials, culturals i científics que converteixen els parcs nacionals canaris en un subconjunt clarament diferenciat en la Xarxa de Parcs Nacionals creada per mitjà de la Llei 5/2007, de 3 d'abril.

Concretament, la Xarxa Canària de Parcs Nacionals persegueix l'homogeneïtat del conjunt dels parcs nacionals a Canàries, com a conjunt específic que presenta particularitats suficients a nivell de fins, objectius, organització i règim jurídic, que justifiquen la seva existència autònoma respecte de la Xarxa Canària d'Espais Naturals Protegits.

Les línies organitzatives bàsiques per gestionar els parcs nacionals que la integren (art. del 5 al 10) s'articulen basant-se en això. Aquest esquema organitzatiu pivota, d'una banda, entorn d'una organització comuna a tota la Xarxa Canària, i de l'altra, a diferents òrgans específics de cada un dels parcs nacionals, com són els directors conservadors o els patronats, figures d'existència obligatòria d'acord amb la normativa estatal bàsica.

Respecte a l'organització comuna a tots els parcs, el decret aborda la creació d'un nou òrgan col·legiat autonòmic —la Comissió de Parcs Nacionals Canaris— que ha d'encapçalar i assumir amb caràcter originari les funcions administratives de gestió de la Xarxa Canària de Parcs Nacionals, i exercir-ne així mateix la representació i les funcions de coordinació precises per mantenir la coherència i l'homogeneïtat del sistema (art. del 7 al 10).

D'altra banda, com que la gestió dels restants espais naturals protegits s'atribueix als *cabildos* insulars, el decret (art. 14) estableix delegar les competències de gestió als *cabildos* insulars, per raons d'homogeneïtat, continuïtat territorial i d'harmonització de polítiques i estratègies de sostenibilitat, i garanteix l'harmonització, la coherència, la coordinació i l'homogeneïtzació dels serveis de la Xarxa Canària de Parcs Nacionals.

Finalment, s'assignen al Govern de Canàries les competències relatives a la iniciativa per a la declaració o modificació dels límits dels parcs nacionals a Canàries, l'audiència en cas de la pèrdua de la condició de parc nacional o el desplegament del procediment d'aprovació dels plans rectors d'ús i gestió dels parcs.